

Septiembre / diciembre 2000

La protesta social en América Latina

Por José A. Seoane

Para América Latina el año que recién concluye se ha caracterizado por un sostenido crecimiento, cuantitativo y cualitativo, de la protesta social que se expresa de manera desigual y combinada en los diferentes países. Abierto con la revuelta indígena en Ecuador en enero, finalizado con sendas huelgas nacionales a fines de noviembre y principios de diciembre en Argentina y Uruguay, una diversidad de conflictos, protagonizados particularmente por los trabajadores del sector público y por el movimiento campesino, jalaron estos últimos doce meses. Entre los hitos más destacados se cuentan, además de los ya mencionados, las luchas sociales de abril y septiembre en Bolivia y aquellas realizadas en Perú con el propósito de desalojar al presidente Fujimori del poder. La amplitud y especificidad de este proceso intentó ser reflejada consistentemente en los tres números que la revista del OSAL lleva editados.

Dichas protestas se inscribieron en un contexto político, económico y social particularmente complejo signado por los ecos, aún hoy sumamente potentes en algunos países, de la inestabilidad y la recesión económica abiertas en casi toda la región tras la crisis asiática y rusa del '97 y '98, agudizadas por un desfavorable marco internacional y por la continuidad del proceso de concentración del ingreso y la riqueza. Un contexto caracterizado también por los renovados intentos de responder a esta situación profundizando las políticas de corte neoliberal y la subordinación del espacio latinoamericano a la hegemonía de los EE.UU.

Estas tendencias se expresaron con una singularidad específica en el último cuatrimestre del año (septiembre/diciembre), período para el que se presenta a continuación la cronología de los principales conflictos sociales acontecidos en 18 países de latinoamérica.

Iniciado el septiembre boliviano con la huelga nacional del magisterio urbano, los bloqueos de rutas encabezados por el movimiento indígena campesino del altiplano y por los campesinos cocaleros de la región del Chapare (que aislaron durante días las principales ciudades) y las acciones de la Coordinadora del Agua cochabambina reabrieron, con mayor intensidad y amplitud, la crisis política que había atravesado al país en abril. Este ciclo de intensa movilización es una muestra de la creciente conflictividad social que, en el orden cuantitativo, se sintetiza en el hecho que los registros relevados se hayan casi duplicado respecto del cuatrimestre anterior. Presentaremos a continuación un análisis introductorio a los mismos.

Por una parte, en el ámbito político, en este cuatrimestre se destacan las elecciones municipales en Brasil, Nicaragua, Chile y Venezuela, en este último simultáneas al plebiscito impulsado por el gobierno sobre la reformulación del modelo sindical. Sin embargo, los dos hechos más relevantes de la política de la región fueron, sin duda, la destitución de Fujimori en Perú y la asunción del presidente electo Vicente Fox en México poniendo fin a más de siete décadas de gobiernos priístas. La consideración del derrumbe del fujimorismo y del régimen surgido de la revolución mexicana, más allá de las indudables diferencias existentes entre ambos, como manifestaciones de una recuperación democrática no debería soslayar las perniciosas consecuencias que la aplicación de las políticas neoliberales han tenido sobre los procesos democráticos en América Latina y el Caribe. Revitalización democrática y neoliberalismo aparecen así como términos contrapuestos, marcando para estos países una tensión de incierta resolución.

Confirmando esta apreciación, estos últimos cuatro meses del año han visto, tal como lo señalan varios de los organismos de derechos humanos regionales, un incremento de la violencia y de la represión, así como una profundización de las políticas de criminalización de las protestas y procesamiento de dirigentes sociales. Dichos hechos aparecen volcados en las cronologías y, en particular, vale señalar la campaña iniciada contra esta situación por el Movimiento de los trabajadores rurales Sin Tierra (MST) en Brasil.

Por otra parte, en relación con la política estadounidense para latinoamérica, las amenazas de militarización de la región andina que supone el Plan Colombia se suman al nuevo impulso que han cobrado en el área los procesos de dolarización. En el segundo semestre de 2000 dos países latinoamericanos han adoptado al dólar como su moneda oficial. A principios de septiembre entró en vigencia en Ecuador la dolarización promulgada meses antes y el 30 de noviembre la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una medida similar puesta en marcha el 1° de enero próximo pasado. Estos dos hechos, sumados al lugar destacado que dicha cuestión suscita en el debate económico en Argentina y a la sanción, hacia fines de diciembre, de una ley que permite la libre circulación de divisas extranjeras en Guatemala señalan la particular dinámica que ha adquirido este proceso. Esto, sin duda, no puede disociarse de las negociaciones sobre el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) cuyas próximas cumbres previstas para abril próximo en Buenos Aires y Québec preveen poner fecha y forma definitiva a la constitución de dicho acuerdo, hasta hoy vedado al debate público.

Estos intentos de consolidar y profundizar la hegemonía estadounidense en la región se suman a las renovadas medidas de política económica de corte neoliberal que han caracterizado buena parte de las decisiones adoptadas por la mayoría de los gobiernos del continente en estos últimos cuatro meses. Dichas políticas se expresaron, fundamentalmente, en la continuidad de las privatizaciones y, particularmente, en la confección y sanción de los presupuestos nacionales para el año 2001. En el primer caso la aprobación, a fines de octubre, en Paraguay, de la ley que habilita al Poder Ejecutivo a realizar las privatizaciones sin necesidad de consultar con el Congreso (llamada "vía rápida"), se suma a las intenciones expresadas por los gobiernos de México (energía eléctrica y petroquímica fundamentalmente) y Uruguay (en menor medida) de avanzar en ese sentido; así como a las privatizaciones anunciadas o encaradas en distintos países de la región, entre ellos Ecuador (Ley Trole II), Nicaragua y El Salvador. Complementariamente la aprobación de los presupuestos correspondientes al año 2001 también significó, en muchos países, una profundización del ajuste sobre el sector público en consonancia con las recomendaciones de los organismos financieros internacionales y del pensamiento económico ortodoxo. Como contrafigura a estas políticas los trabajadores de este sector, al igual que el cuatrimestre pasado, volvieron a ocupar un lugar destacado en los antagonismos del período sumando un quinto de todos los registros de conflicto relevados por el OSAL. Aquellos orientados a cuestionar los presupuestos fiscales, reiterados en buena parte de los países, aparecen con gran nitidez en el caso de Uruguay donde a una serie de protestas iniciadas en el sector educativo (secundaria y universidad) se sumaron otros sectores de la administración estatal hasta culminar en la huelga nacional convocada por el PIT-CNT que incluye la demanda de un "presupuesto justo". Por otra parte, en relación con esta cuestión y a diferencia del cuatrimestre anterior, son los trabajadores de la administración pública, en todos sus niveles, los protagonistas más relevantes y, en casi todos los países considerados aparecen consignadas sus acciones. Del cuadro general se destacan la larga serie de protestas en México, encarnadas por distintas reparticiones públicas, y posteriormente por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) que exigen, fundamentalmente, el pago de un bono sexenal. También vale señalar los ya referidos en Uruguay y Argentina.

Del mismo modo, las manifestaciones docentes también siguen siendo significativas, particularmente en México, Bolivia, Argentina y Uruguay. En este último caso el conflicto educativo aparece ya en los inicios de septiembre con sendos paros nacionales de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ASET) y de la Intergremial Universitaria, se prolonga en una seguidilla de ocupaciones estudiantiles de numerosos liceos, para estallar, hacia el fin

del mes, en una prolongada huelga universitaria que, animada por estudiantes, funcionarios y docentes, se extiende hasta casi fines de diciembre en reclamo de un mayor presupuesto.

En un período similar, también en Uruguay, tiene lugar una extensa línea de iniciativas protagonizadas por los trabajadores de la salud del sector público, en rechazo a las rebajas salariales y reclamando mayor financiamiento en relación al presupuesto 2001 en discusión; y también, aunque en menor medida, se cuentan acciones de los trabajadores de la salud del sector privado.

En este sentido, si consideramos al sector industrial (en general privado) a nivel regional, hay dos hechos que sobresalen: por un lado la huelga de 24 horas realizada por los trabajadores metalúrgicos del ABC paulista en reclamo de aumento salarial y que paraliza las fábricas de Volkswagen, Ford, Scania y Mercedes Benz; y por otro, la serie de paros y enfrentamientos que protagonizan los trabajadores portuarios en Chile.

Un sujeto relevante del período (y de todo el año) lo constituye el campesinado. Hemos señalado ya, aunque muy brevemente, las protestas del movimiento indígena campesino en Bolivia. También en el caso brasileño, septiembre se inicia con una significativa protesta nacional del MST que, en reclamo de los compromisos oficiales en relación a la aplicación de la reforma agraria, incluye la ocupación de las sedes regionales del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, comienzo de un accionar que, con interrupciones, atraviesa todo el período. México (con la tensa situación en Chiapas en el marco de la transición política), Chile y Ecuador se distinguen también por las acciones del movimiento indígena campesino.

Finalmente, resultan significativos también los conflictos encabezados por el sector empresarial, particularmente aquellos medianos y pequeños, resultado, en general, del proceso de concentración y centralización del capital así como de un contexto económico internacional desfavorable (aumento de los precios del petróleo, caída de los commodities). En este caso las protestas se concentran fundamentalmente en el área del transporte -tanto de pasajeros, como de carga- (ver las cronologías de Colombia, Panamá, Uruguay, Chile y Argentina) y en el sector agropecuario (ver las cronologías de Nicaragua y Argentina).

En relación con las movilizaciones de extensión nacional, a las huelgas nacionales de distinta intensidad realizadas en este último cuatrimestre (particularmente en Argentina, Uruguay y Honduras) y a las manifestaciones y campañas promovidas por las centrales sindicales en diferentes países (Chile y Brasil fundamentalmente) deben sumarse aquellas impulsadas por las organizaciones campesinas. Sin embargo, de entre todas ellas se distingue el ciclo de protestas sociales que, bajo diferentes formas, se extiende a lo largo de los cuatro meses en Perú y donde, en un marco general de cuestionamiento al régimen de Fujimori y con una fuerte presencia también de reclamos sectoriales, culmina con la destitución del presidente a fines de noviembre.

Esta intensa, diversa y convergente expresión del antagonismo social en la región latinoamericana puede apreciarse con mayor profundidad en las cronologías. A modo de síntesis vale recalcar que, considerada globalmente, la conflictividad social del período se distingue del cuatrimestre anterior no solamente por su crecimiento cuantitativo, si bien desigualmente distribuido, sino que, en muchos casos, también por la profundidad, extensión y radicalidad de las formas que ésta asume.

Finalmente, y siendo el presente un número dedicado a las convergencias internacionales contra la mundialización neoliberal, concluimos señalando al lector que encontrará en las cronologías varias referencias a estas movilizaciones. En este sentido, se distinguen las manifestaciones del 26 de setiembre en Argentina y Brasil simultáneas a las realizadas en Praga frente a la reunión del FMI y el BM, así como la Marcha Mundial de las Mujeres 2000 en México y distintos países centroamericanos.